

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veintidós (2022).

**APELACIÓN - MEDIDA DE PROTECCIÓN DE: ADRIANA ALARCÓN ALARCÓN
CONTRA: EYNER LOZANO MARQUEZ. RADICADO N°. 2022-00324**

Se decide la Apelación presentada en audiencia por la apoderada judicial de la señora **ADRIANA ALARCÓN ALARCÓN** en contra de la resolución proferida el día 25 de marzo de 2022, por la Comisaría Once de Familia Suba I de esta ciudad, dentro de la medida de protección indicada en la referencia.

I.- ANTECEDENTES:

La señora **ADRIANA ALARCÓN ALARCÓN**, solicitó ante la Comisaría Once de Familia Suba I de esta ciudad, **MEDIDA DE PROTECCIÓN** a su favor, por el maltrato psicológico, verbal y económico, en contra del señor **EYNER LOZANO MARQUEZ**, por hechos acaecidos el día 24 de junio de 2021.

Fundamentó la solicitud indicando “el día 24 de junio a las 5 de la tarde aproximadamente, estábamos en un restaurante con el señor Eyner Lozano Márquez quien es mi cónyuge pero no vivimos bajo el mismo techo hace 9 meses porque decidimos separarnos, estaba su hermano Harvey Lozano también, porque íbamos hablar de la negociación de venta de un apartamento que el señor Harvey nos va a comprar y donde vive hace dos, entonces yo le dije que como él se había comprometido a pasarme un dinero mensual para mi manutención, por lo que yo en este momento no puedo trabajar porque tengo una discapacidad producida por espondiloartritis seronegativa desde hace 8 años, y el dinero que me está pasando no es suficiente entonces que me diera el arriendo del apto que le estaba pagando el hermano, yo le dije que como él está haciendo cirugías pero no se las están pagando todavía que me diera la plata de ese arriendo, entonces empezó a gritarme, a decirme que yo de donde sacaba que él estaba haciendo cirugías, que él no tenía plata, entonces como yo ya estoy cansada de oírles sus gritos me pare, me despedí y me fui. Las agresiones verbales y psicológicas han sido desde años atrás pero nunca las denuncie porque ignoraba que todo lo que yo estaba viviendo era violencia emocional, veía la situación como normal, siempre considerándolo, pero mi esposo Eyner Lozano Márquez siempre me gritaba me decía que yo era una loca, fanática religiosa, que tenía problemas psiquiátricos, me decía palabras humillantes, descalificantes, yo me salí de trabajar porque él me dijo que me quedara en la casa cuidando a nuestros hijos, porque lo que yo ganaba, él se lo ganaba en dos cirugías, yo sé que toda esta violencia fue mucho antes y no la denuncie, pero ahora mi afectación psicológica y emocional es muy notoria y esa violencia es la que en este momento me tiene muy mal y he tenido que asistir a citas por psiquiatría y por psicología, en psiquiatría me diagnosticaron depresión moderada y la violencia económica que está generándose por dilatar el proceso de venta del apartamento, por no asistir a las citas acordadas para ello, eso también me afecta psicológicamente”

La anterior medida de protección correspondió a la Comisaría Once de Familia Suba I de esta ciudad, Despacho que se admitió en auto del 14 de junio del año 2021.

Admitida a trámite la anterior solicitud de protección y una vez fenecida la etapa probatoria, procedió el a quo a proferir resolución el día 25 de marzo de 2022, mediante la cual resolvió “**DECLARAR NO PROBADOS** los hechos constitutivos de violencia intrafamiliar expuestos dentro de la medida de la referencia...”.

Inconforme con el fallo proferido, la denunciante a través de su apoderada judicial interpuso recurso de apelación, el cual sustentó manifestando que: “... entre la parte accionante y accionada existe un deber de solidaridad, ayuda y socorro mutuo que se está incumpliendo en este momento y que su falta o cumplimiento del mismo genera en mi representada afectación de carácter físicas, psicológicas, emocionales y económicas”; y presenta escrito de sustentación del mencionado recurso en el que indica que “...de las pruebas aportadas y del análisis realizado, se podría decir que dentro del presente trámite,

se encuentran probados tres elementos fundamentales: 1- Que la señora ADRIANA ALARCON, se encuentra casada con el señor EYNER LOZANO MARQUEZ, desde hace de 37 años. 2- Que se encuentra padeciendo una situación especial de salud, que la imposibilita incluso para su desplazamiento y 3- Que no cuenta con las condiciones mínimas para vivir dignamente. Elementos estos, que fueron mencionados y reconocidos por el despacho, a la vez que aceptados por el señor EYNER LOZANO MARQUEZ, dentro del presente trámite. Concluyéndose así, que luego de hacerse un recuento sucinto de las pruebas aportadas indicó: "en razón a lo anterior ante la falta de elementos probatorios conforme lo establecido en el artículo 167 del código general del proceso, procederán la suscrita a declarar no probados los hechos de presunta violencia incoados por la Sra. ADRIANA ALARCON ALARCON en contra del señor EYNER LOZANO MARQUEZ.... Y es que, haciendo referencia a que se entiende la violencia contra la mujer como cualquier ACCION U OMISION que le cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, por su condición de mujer ... no se lograría entonces en este caso, evidenciar la OMISION del DEBER DE SOLIDARIDAD, AYUDA Y SOCORRO MUTUO al que se viene sustrayendo un esposo, como EYNER LOZANO MARQUEZ, quien conto - y así no haya contado con el compromiso y afecto de una mujer que le ayudó a ascender profesional y económicamente hasta donde se encuentra hoy, disfrutando de una excelente calidad de vida - Todo esto, mientras que, en contra de ADRIANA como mujer, se ejercen hechos de violencias PSICOLOGICAS Y ECONOMICAS ENTRE OTRAS." Argumenta también su petición indicando el compromiso y deber de las autoridades judiciales analizar los hechos y las pruebas aportadas con el fin de garantizar los derechos y la dignidad de las mujeres y solicita la apelante, se revoque el fallo proferido por la Comisaria de Familia de Suba I.

Rituardo como se encuentra el trámite propio de esta instancia, entra ahora el juzgado a desatar el recurso de apelación, con base en las siguientes,

II.- CONSIDERACIONES:

El ideal de la familia es la armonía, la comprensión y el entendimiento que conllevan la estabilidad y la placentera convivencia entre sus miembros. El resquebrajamiento de ese estado, por lo general tiene su génesis en los maltratamientos físicos o psicológicos de que se hacen padres e hijos entre sí o éstos a su prole y demás personas que la conforman. Esas conductas que hacen imposible la comunidad de vida en la familia y que se constituyen en irrespeto entre quienes la componen es deber del Estado prevenirlas y sancionarlas si es que se han producido.

Precisamente con el fin de sancionar las conductas atentatorias contra la estabilidad física, emocional y psicológica de la familia, el legislador promulgó la ley 294 de 1996, mediante la cual desarrolló el artículo 42 de la Carta Política, ley que contiene normas para prevenir, remediar y sancionar los actos constitutivos de violencia intrafamiliar.

Dicha ley contempla en el inciso 1º del artículo 4º que: **"Toda persona que en el contexto de una familia sea víctima de daño físico o psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, pedir al juez de familia o promiscuo de familia; promiscuo municipal o civil municipal, si faltare el de familia, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que ésta se realice cuando fuere inminente.**

A su turno el art. 164 del C.G.P. es claro al disponer que: **"Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso".**

Así mismo, el art. 167 ibídem prevé: **"Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen..."**

Sobre este particular el Dr. HERNANDO DEVIS ECHANDIA, en su obra PRUEBAS JUDICIALES, tomo II, 2ª edición, pág. 141 y 142 dice: **"Carga de la prueba es una noción procesal, que contiene la regla de juicio por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar, cuando no encuentra en el proceso pruebas que le den certeza sobre los**

hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitar las consecuencias desfavorables o favorables, a la otra parte.

...El fundamento de la carga de la prueba debe examinarse teniendo en cuenta los dos aspectos de la noción: la regla de juicio para el juez, y la distribución entre las partes del riesgo de la falta de prueba.

Por el primer aspecto, su fundamento radica en la extraordinaria importancia que reviste esta noción en el campo general del derecho y en el particular del proceso, como acabamos de verlo en el numeral anterior: la seguridad jurídica, la armonía social, el interés general en que se realicen los fines propios del proceso y la jurisdicción, reclaman su existencia.

Creemos que el fundamento de la carga de la prueba, como norma de distribución del riesgo de la falta de certeza (segundo aspecto de la noción), se encuentra en los principios de la lógica, la justicia distributiva y la igualdad de las partes ante la ley y el proceso, esto es, en la necesidad de darle a todas las partes una adecuada e igual oportunidad y una guía segura para la defensa de sus derechos y de su libertad; en lo penal, además, en la necesidad jurídica de absolver al reo cuando no haya plena prueba en su contra (in dubium pro reo).

Encuentra el Despacho que en el presente asunto, manifestó la accionante ser víctima de violencia verbal, psicológica y económica por parte del accionado, como quiera que el 24 de junio de 2021, cuando se encontraba en un restaurante junto con el señor Eyner Lozano Márquez y el hermano de este, en su calidad de arrendatario de un inmueble de la pareja, quien les cancela el canon de arrendamiento en partes iguales y que ante el hecho de ella haberle pedido a su esposo la totalidad del mismo, fue agredida por lo que ella se levantó, se despidió y se fue del restaurante, indicó además que las agresiones fueron recibidas durante su matrimonio por su esposo, de las cuales refiere haber recibido gritos, humillaciones, descalificaciones y no haberle permitido trabajar debiendo quedarse a cargo de los hijos en común y en consecuencia, depender económicamente del accionado.

Frente a la desigual de distribución del poder y a las relaciones asimétricas que se establecen entre varones y mujeres en nuestra sociedad; este despacho retoma algunos de los estatutos jurídicos internacionales y nacionales de protección de los derechos de las mujeres, en el que se destaca el instrumento emitido por la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), emitiendo las recomendaciones que deben ser atendidas por los Estados con el fin de garantizar y proteger la indemnidad física y emocional de la mujer, definiendo la violencia contra la mujer como:

“Artículo 1.cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

Artículo 2. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:

Artículo 3. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”

Artículo 9. Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.

De la misma manera, en la Resolución 58/501 de 2004, la Asamblea General de las Naciones Unidas y a nivel nacional la Ley 1257 de 2008; incorporo en nuestro ordenamiento:

“Artículo 2o. DEFINICIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. Para efectos de la presente ley, y de conformidad con lo estipulado en los Planes de Acción de las Conferencias de Viena, Cairo y Beijing, por violencia económica, se entiende cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas.”

Igualmente esta Ley, en su artículo tercero preceptúa que:

“a) Daño psicológico: Consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. b) Daño o sufrimiento físico: Riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona. c) Daño o sufrimiento sexual: Consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas. d) Daño patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer.”

Puestas, así las cosas, se estudiará entonces si en el caso presente, de acuerdo con las pruebas recopiladas, se demuestran los actos de agresión que se le imputan al denunciado.

En audiencia la señora **ADRIANA ALARCÓN ALARCÓN**, se ratifica de los hechos denunciados manifestando “quiero agregar que desde esa fecha se han vuelto a presentar nuevos hechos de violencia en mi contra, lo que ha pasado es que dejó de pasarme la plata que me pasaba, quedó de llegar a firmar la promesa de compraventa con el hermano y nunca dijo nada más y el hermano pagaba 1.300 mil pesos (sic) más la administración que son como 380 y luego él unilateralmente decidió aumentarle a \$1.500.000.00 pesos el arriendo y entonces ya no me pasaba 650 sino 750 y eso es todo lo que me pasa y entonces llevamos septiembre, octubre, noviembre y vamos para diciembre en que no me pasa nada, yo le escribí en un WhatsApp que tenía la obligación de pasarme y él dijo que nosotros no teníamos ninguna situación definida y le dije que la situación la definimos hace 35 años y además él había manifestado que se comprometía a pagar mi manutención en un WhatsApp que traje copia. No ha existido violencia verbal, desde 24 de junio no hablamos... presente la demanda de divorcio se encuentra en el Juzgado Noveno de Familia de esta ciudad” y al preguntársele sobre su pretensión respecto a la medida de protección indicó que “cumpla con la obligación de ayuda y solidaridad a la cual tengo derecho porque no tengo con que comer porque quien está cumpliendo con mi obligación es mi hija de 21 años que no tiene obligación de responder por mí todavía, está bajo la responsabilidad de Eyner como mía”, indicó que en el Juzgado Noveno se ordenó medidas cautelares en su favor, el embargo del 30% del salario del señor Eyner Lozano Márquez, que se fue a vivir en arriendo para un apto más pequeño porque no le alcanzaba la plata para seguir en ese arriendo, exigiéndole a ella y su hija bajarán de estrato porque él no podía seguir pagando esa plata, que el denunciado le dijo que no tenía plata, que las cirugías en Baxter se le habían bajado mucho y que no podía más, pero afirma la denunciante hace viajes semanales a Pereira a una casa que tiene allá con su compañera en un edificio estrato 6, que conoce que le están pagando más en Baxter, más ocho millones de pesos que se gana en la

universidad Nacional, dice que sacó toda la plata de sus cesantías del Fondo Nacional del Ahorro y canceló los fondos que tenía en el Fondo de docentes de la universidad Nacional y pidió que se los giraran a su nueva compañera y además, pidió un préstamo por cien millones de pesos, pero no sabe si le aprobaron el mismo e indica que de toda esta información es conocedor el Juez de Familia de esta ciudad.

Por su parte el accionado señor **EYNER LOZANO MARQUEZ**, indicó “los hechos son falsos, ella dice que yo la grite en el restaurante YANUBA y tengo la respuesta del derecho de petición que dice que no hubo ninguna alteración..., aparte de eso mi hermano Harvey Lozano hizo una declaración juramentada donde él dice que jamás la grité y acá esta la certificación del restaurante YANUBA a mis derechos de petición donde dice que no hubo ningún altercado, ni queja de ninguno de los comensales y que así lo registraron las cámaras, ella falta a la verdad cuando dice que la grite ese día. Con relación a la venta del apto consulté con varios abogados y dijeron que no vendiera el apto hasta que no se liquidara la sociedad conyugal, yo le pedí a ella en 3 oportunidades que legalizáramos el divorcio y la separación de la sociedad conyugal y la respuesta final de ella fue un rotundo no y ella aludía también lo de la pensión, pero hace 15 días recibí notificación de que presentó demanda de divorcio en la cual se pidió el embargo de mi sueldo de la Universidad Nacional, y de los dos vehículos, las cuales fueron decretadas por el Juez. Inicialmente, yo tengo 61 años y estoy a 5 meses de la pensión, llevé trabajando 36 años y el único que aportaba en la casa era yo y jamás faltó nada en la casa y a mis hijos les di toda la educación y la salud y la recreación y les exigí que estudiaran en universidad pública y todo mi sueldo se iba para los gastos de mi familia, ella no puede decir que fui alcohólico o que tenía otra vieja y en marzo de 2020 por la pandemia y por mi edad el Dcto. presidencial me obliga a una contratación que tenía con el Hospital Simón Bolívar que me representaba el 60 o 70% de mis ingresos, habían 3 carros, decidí vender 2 carros para aguantar lo de la pandemia y en octubre decidimos separarnos y me fui a vivir donde mi mamá, porque no podía pagar ningún apto y para mantenerles el nivel de vida que ellas tenían, hasta agosto de este año tuve que pedir prestado dinero; ella falta a la verdad porque mis ingresos son de \$ 6.500.000 de la Universidad Nacional y le pedí a Baxter que me diera una certificación y es por \$2.575.255.00, de los cuales yo le doy a mi hija \$ 2.143.500 y en junio representó para ellas la suma de \$5.178.708 de los cuales ADRIANA sacó a señora de la casa y como no le pagábamos salud y pensión yo le cancelo la suma mensual de \$877.800; yo pago por seguridad social la suma de \$928.100 y le doy de ayuda a mi mamá la suma de un millón de pesos. A mí de junio me queda para vivir la suma de \$2.390.647 y puedo adjuntar todos los soportes. La plata que pedí prestada y no pude echar mano de nada, en cinco meses estoy pensionado; todas las cuentas están claras; me toco poner una denuncia penal porque la señora entro a mi correo institucional, hackearon a mi correo porque esas pruebas fueron aportadas en la demanda y la universidad me exigió poner una denuncia penal y una medida de protección por el derecho a la privacidad. No acepto los cargos, lo último que quiero decir es que ella tiene antecedentes de depresión desde 1992 y ella dice que yo no la dejo trabajar y en el 1992 ella trabajó y en el 2003, estaba dispuesto a renunciar a mi trabajo para que ella pudiera trabajar en Canadá”.

Obran también las siguientes pruebas documentales: Solicitud de medida de protección; manuscrito visible a folio 71; historia clínica de la accionante, una de la especialidad de reumatología y otra de la especialidad de psiquiatría, con diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión; certificado de libertad de apartamento que se pretendía vender; relación de órdenes de pago por parte de la Universidad Nacional; comprobante de nómina expedido por la Universidad Nacional de Colombia; respuesta del derecho de petición presentado por el señor Eyner Lozano Márquez, al restaurante Yanuba de la 122, en el que se indica que el día 24 de junio de 2021 no se presentó ningún incidente entre los clientes; declaración juramentada por parte del señor **Harvey Lozano Márquez**, quien refiere que las partes se encontraban al momento de los hechos e indicó “...La reunión se llevó a cabo de manera cordial, sin que existiera ningún tipo de situación que pudiera manifestarse incorrecta o agresiva, hasta el momento en que la señora Adriana Alarcón le solicitó a mi hermano Eyner Lozano, que le consignara la totalidad del valor mensual del canon de arrendamiento que yo pago por el inmueble, ante lo cual mi hermano le manifestó la imposibilidad de hacerlo, argumentando que el dinero del arriendo, era prácticamente lo que a él le quedaba para su manutención, ante

lo cual la señora Adriana Alarcón súbitamente se paró de la mesa, se despidió de mí y se fue, situación a la que en su momento no le di ninguna relevancia, puesto que la conversación no se salió en ningún momento de tono, ni se tornó agresiva por parte de ninguno de los dos, entendí simplemente que Adriana Alarcón, no le había gustado la respuesta de mi hermano, y que esa era la razón por la cual se había parado de manera súbita”; certificación de ingresos del señor Eyner Lozano Márquez emitida por la Universidad Nacional de fecha 11 de noviembre; certificación de ingresos de la empresa Baxter; planilla de aportes en seguridad social que cancela el señor Eyner Lozano Márquez mensualmente; declaración juramentada de la señora Julia Márquez de Lozano; acta de conciliación suscrita entre el señor Eyner Lozano Márquez y Daniela Lozano Alarcón de fecha 15 de julio de 2021 y recibos de pago a nombre de la señora Celia Ramírez.

Se recepcionó el testimonio de la joven **DANIELA LOZANO ALARCON**, hija de las partes quien indicó: “Soy la persona que ha vivido con mis papás desde hace 21 años y estoy acá para testificar la situación actual. Respecto a la situación por la que se puso la medida de protección fueron si no estoy mal como tres tipos de violencia o abuso psicológica y verbal, económico y patrimonial; con respecto a la patrimonial que creo es la más corta mis papás tienen un apto en la floresta en el que vivimos hasta que yo tuve 8 años y ese apto lo está habitando mi tío por parte de papá, quien se ha comprometido a comprarlo múltiples veces y no se ha concretado y el evento más claro y específico fue cuando tanto mi tío como mi papá firmaron un papel en el que se comprometía con una fecha para firmar los documentos de la venta del apto. Si bien mi tío está pagando un arriendo, dijo que lo iba a comprar, el negocio no se ha pisado ni se ha dado la primera cuota y el día que habrían quedado de ir a firmar para la venta del apto, mi papá se fue de la ciudad y después no volvieron a contactar a mi papá y ellos después no aparecieron y después de manera autónoma sin consultar a mi mamá mi papá decidió subírle al arriendo a mi tío y mi tío sigue viviendo en un apto que el remodelo pero que es de mi papá y de mi mamá. Con respecto a los temas de la violencia económica mi papá en un mensaje escrito y en un acuerdo verbal con mi mamá y mis hermanos, se comprometió a responder tanto a mi mamá como por mí y eso se cumplió parcialmente 7 meses y desde junio de 2020, empezaron a haber como problemas con la parte económica y por varios comentarios de mi papá me empecé a dar cuenta que esto no olía bien y mi papá empezó a no dar cumplimiento con ciertas cosas que eran su obligación y al decir el que solo me daría eso si un abogado le decía, se hizo una conciliación con la cámara de comercio en la que se fijó una cuota de alimentación un valor va hasta octubre de 2020 y de ahí en adelante de \$1.900.000, una vez sucedido esto mi papá dejó de responder por mi mamá y mi mamá por múltiples razones no trabaja. La primera es porque ella tiene una enfermedad autoinmune que le empezó cuando yo tenía ocho años y esto hace que le duelan todas las articulaciones músculos y demás cosas del cuerpo. En términos prácticos esta condición hace que mi mamá no pueda hacer fuerzas y que pueda caminar máximo 7 minutos, no puede estar mucho tiempo sentada porque le duele la cadera y la cintura, no puede estar mucho tiempo de pie y la segunda razón fue porque mi papá le dijo que se dedicara al cuidado de los hijos y del hogar” respecto a hechos de violencia física y psicológica indico “siempre fueron en la casa o en el recinto donde estamos, nunca fue física, fue verbal y psicológica, la última fue septiembre de 2020, estaban encerrados en el cuarto, recuerdo que mi papá decía que mi mamá debía de estar con una de sus cosas locas de sus creencias, acudió a un punto a decir que la incapacidad de mi mamá se debió a una infancia traumática y todo esto era con gritos por parte de mi papá y con palabras muy fuertes y mi mamá lloraba y decía que no podía más. Que yo haya estado ahí no recuerdo más eventos porque desde octubre de 2020 ellos dejaron de tener contacto permanente y se encontraban por fuera de la casa y yo no iba. La violencia más fuerte en el último tiempo ha sido económica y yo siendo estudiante he tenido que mantener a mi mamá yo sola cien por ciento, de becas que me gane en la universidad que se tenían ahorradas para posgrados o intercambios y de la cuota que mi papá me pasa a mi mensualmente. Esa cuota estaba pensada que la mitad se iba a pasar a mi mamá y como eso fue así se supone que dentro de la cuota mía estaba la mitad de los servicios, del mercado, en este momento estoy recibiendo \$2.006.000 de los cuales se van \$1.500.000 en arriendo que fue el precio que mi papá dijo que podía pagar en la conciliación y los 500 que sobran se van en servicios, de la mitad del arriendo del apto se saca para transporte y mercado y el resto de la vida ha

salido de ayudas de mi abuela materna, abuelo materno y como de ayudas o caridades que nos han dado amigas de mi mamá, de diferentes ayudas de personas; los bonos de mi mamá salieron de mi ahorro para posgrados, que ya en este momento queda en cero pesos. Si no me entregan este semestre la beca quedamos en la mala y estamos viviendo con la cuota que pasa mi papá a mí que se supone que de eso solo debería a mi mamá \$1.200000, pero no voy a dejar a mi mamá sin techo y sin comida y le paso la totalidad o viene de personas externas, mi pareja me ha tenido que ayudar con temas de bus o cosas así y he tenido que buscar un ingreso en mi condición de estudiante ayudando para tener para el semestre mío y como monitorea este semestre...”

En declaración el señor **HARVEY LOZANO MARQUEZ**, indicó: “en fecha 24 de junio del año 2021, fui citado por Adriana Alarcón en el restaurante Yanuba del norte con el propósito de reunirnos para una diligencia de carácter comercial para la compra del apto de propiedad de mi hermano y ella y en el cual yo ya estaba viviendo pagando un canon de arrendamiento; nos encontramos pedimos algo de tomar o de comer y nos dedicamos a ver como se hacía para la diligencia de la compra, dado que a mí me fue negado un préstamo del fondo nacional el ahorro y debíamos acordar como continuar con la diligencia de ese negocio, acordamos hacer un breve documento a mano con fechas futuras de continuar con dicha diligencia y se acordó un incremento en el canon de arrendamiento que venía cumpliendo muy rigurosa y cumplidamente; una vez se tocó ese tema Adriana le dijo a mi hermano que ella debería recibir la totalidad de ese canon de arrendamiento ante lo cual él le dijo que le era imposible porque sus ingresos estaban muy restringidos según entiendo por el dinero que él les entregaba a ellas sin que hubiera escuchado algún detalle numérico; ante esa afirmación note que hubo una molestia entre los dos y el ambiente se puso un poco tenso y súbitamente ADRIANA dijo que ella mejor se iba, que no estaba de acuerdo con la decisión respecto a ese arrendamiento y se paró y dijo que ella se iba y se dirigió diciéndome tú pagas, porque yo había hecho la invitación”; al preguntársele si de acuerdo a su relato el ambiente hubo gritos, malas palabras o algún tipo de agravio entre los señores Adriana Alarcón Alarcón y Eyner Lozano Márquez, refirió “ninguno”; y sobre la venta del apartamento indicó “ No se llevó a cabo porque mi asesor, abogado que me orienta en estos asuntos me dijo que lo más prudente era esperar a que la situación que presenta mi hermano y Adriana se solucione, que era mejor esperar y que era mejor seguir pagando el canon de arrendamiento. Quiero agregar que yo he venido pagando el canon del arrendamiento desde el mes de agosto de 2021 en el cual cancelo 750 mil a cada uno de ellos y yo pago la administración del edificio”.

Valoradas en conjunto las pruebas allegadas, se tiene que Daniela Lozano Alarcón no se encontraba presente al momento en que se presentaron los hechos denunciados y el señor Harvey Lozano Márquez presente el día de los hechos, indicó que se reunió con las partes en el restaurante YANUBA, para tratar sobre la compra del apto de propiedad de los señores Eyner Lozano y Adriana Alarcón y que debido a que le fue negado un préstamo del Fondo Nacional del Ahorro estaban acordando cómo continuar con la diligencia de ese negocio, hacer un breve documento y el incremento en el canon de arrendamiento y una vez se tocó el tema, la señora Adriana solicitó que debía recibir la totalidad del canon de arrendamiento ante lo cual accionado manifestó su negativa, que hubo una molestia entre los dos y el ambiente se puso un poco tenso y súbitamente la señora Adriana se fue, que en el ambiente no hubo gritos, malas palabras o algún tipo de agravio entre los mencionados señores, aunado a esto, se tiene que el representante legal de la empresa Milsen S.A. (Restaurante Yanuba 122), informó que el día 24 de junio de 2021, no se encontró ninguna novedad relacionada con altercados entre clientes del restaurante, por lo que no quedaron demostradas, las agresiones inferidas en su contra el 24 de junio de 2021, nótese como el arrendatario manifestó que por orientación de su abogado era mejor esperar que las partes resolvieran sus diferencias y respecto del canon de arrendamiento indicó que a cada uno de ellos le está entregando la suma de \$750.000, por dicho concepto, situación que no fue desmentida por la accionante, por lo que este despacho encuentra que no fue presentada prueba tampoco sobre un posible daño al patrimonio de la accionante, en los hechos acontecidos el 24 de junio de 2021, nótese como la misma accionante indicó que se inició la acción de divorcio ante autoridad judicial correspondiente y se decretaron medidas cautelares, y si bien aportó documento de una posible promesa de

compraventa, dicho asunto es del resorte del Juzgado que se encuentra conociendo del proceso de divorcio entre las partes, escenario en el cual deberá ser resuelto el mencionado asunto.

Ahora bien respecto a los hechos indicados dentro de la convivencia entre las partes, encuentra este Despacho que las declaraciones de partes y los testimonios recepcionados fueron coincidentes en manifestar que los señores Eyner Lozano Márquez y Adriana Alarcón Alarcón, no conviven desde hace varios meses, precisando la accionante que en el momento que presenta la denuncia no reside bajo el mismo techo con su cónyuge desde hace 9 meses, y por su parte DANIELA afirmó que desde octubre de 2020 ellos dejaron de tener contacto permanente y se encontraban por fuera de la casa; por tanto encuentra el Despacho que para ser atendidos los hechos de violencia intrafamiliar, por autoridad administrativa y dentro de un proceso de medida de protección, los mismos deben ser denunciados a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a su acaecimiento, lo anterior de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 9 de la ley 575 de 2000.

Respecto al argumento presentado por la recurrente, en el que indica existe una insuficiencia probatoria, ya que la autoridad administrativa omitió realizar una valoración probatoria pues a pesar de haberse allegado la pruebas de manera oportuna y en debida forma, estas no fueron tenidas en cuenta para fundamentar la decisión y la necesidad de la apreciación individual y conjunta de las pruebas aportadas dentro del proceso, y que no se aplicó el respectivo análisis dentro de la perspectiva de género, observa el despacho y una vez revisadas las diligencias allegadas, que la comisaría realizó el respectivo análisis de cada una de las pruebas documentales como testimoniales de manera individual y en conjunto, bajo los parámetros de la perspectiva de género tal como se evidencia a folios 150 y 151 del archivo No. 2 del expediente escaneado.

Indica igualmente que no se valoró la historia clínica de la accionante, advirtiendo este despacho que la autoridad administrativa al respecto indicó: “en el plenario, en efecto se puede evidenciar las dolencias y diagnósticos médicos que padece la señora ADRIANA ALARCON ALARCON; condiciones médicas que de acuerdo a su dicho le impiden el ejercicio de una labor productiva que le genere ingresos económicos para su propia manutención. Aspecto que respecto de la violencia económica que alude la accionante en contra del accionado no resulta pertinente, conducente y útil”, no asistiéndole razón a la recurrente, como quiera que si valoró dicho aspecto; ahora, frente a la ayuda y solidaridad por parte de su cónyuge, es ante la autoridad judicial que se debe elevar dicha petición de conformidad con las disposiciones contenidas en el Código Civil, en donde se deberán demostrar tanto la capacidad económica y necesidades de los cónyuges, autoridad que actualmente conoce del proceso de divorcio, según manifestación de la misma accionante.

Es así como al no lograrse demostrar los hechos de violencia denunciados y ocurridos el día 24 de junio de 2021, competencia de la autoridad administrativa, deberá confirmarse la determinación que fuera adoptada por la Comisaría Once de Familia Suba I de esta ciudad, en providencia del día 25 de marzo de 2022, por cuanto se halla acorde a derecho y a la realidad fáctica que arrojan las diligencias, por lo tanto a juicio de este Juzgado, la decisión tomada se ajustó a derecho.

III.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ, D.C.**, administrando justifica en nombre de la República de Colombia y por autoridad de ley,

IV. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la resolución proferida el día 25 de marzo de 2022 por la Comisaría Once de Familia Suba I de esta ciudad, por las razones expuestas en la motivación de esta providencia.

SEGUNDO: REMITIR las diligencias a la Comisaría de Origen, previas las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA MEJÍA MEJÍA
LA JUEZ

JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE
BOGOTÁ D.C.

El anterior auto se notificó por estado No. 88

Hoy 25 de agosto de 2022

CAROLINA SANTAMARÍA LUNA
Secretaria

Firmado Por:
Sandra Mejia Mejia
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Familia 29 Oral
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3d3961bfbec33902ca3beb560d64b44aa5b13d67cc79a50384077cd86922d060**

Documento generado en 24/08/2022 01:45:26 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>